



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Estella Hoyos, Consejero y  
Ponente

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 28 de abril de 2005, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 7 de abril de 2005 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos chopos de su propiedad*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 8 de abril de 2005, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 366/2005, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Estella Hoyos.

**Primero.-** Con fecha 24 de marzo de 2004, tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León una solicitud de indemnización de D. xxxxxxxxxxxx, debido a los daños producidos por el ciervo en chopos de su propiedad, situados en xxxxxxxxxxxx, término municipal de xxxxxxxxxxxx.



Acompaña a su escrito un reportaje fotográfico sobre los daños sufridos por los chopos.

Solicita una indemnización de 120 euros.

**Segundo.-** Consta en el expediente el informe emitido por el agente forestal, de febrero a 17 de marzo de 2004, en el que hace constar que "efectivamente el daño es de la especie referida (ciervo), ya que consistía en un descortezamiento del tallo como consecuencia de rozar la cuerna contra el mismo. Unas plantas estaban descortezadas y otras partidas y tiradas en el suelo al lado de la parte del tallo que quedó en pie. El número de chopos afectados es de 20".

**Tercero.-** Con fecha 10 de noviembre de 2004, se acuerda el nombramiento de Instructor, notificado al interesado el 18 de noviembre de 2004.

**Cuarto.-** La Jefe de la Sección de Vida Silvestre informa, en fecha 26 de enero de 2005, de que "en relación con el lugar en el que se produjo el daño ha de señalarse que, consultados los archivos de este servicio, la citada finca se encuentra ubicada dentro de los límites del coto privado de caza pppp, cuya titularidad ostenta la Junta Vecinal de xxxxxxxxxxxx (...) las posibles responsabilidades derivadas de los presuntos daños referidos por el reclamante corresponderían en todo caso a titularidades cinegéticas ajenas a esta Administración".

**Quinto.-** En el trámite de audiencia concedido al interesado, notificado el 7 de febrero de 2005, este no realiza alegación alguna.

**Sexto.-** Con fecha 3 de marzo de 2005, el Servicio Instructor formula la propuesta de resolución en el sentido de que procede desestimar la reclamación formulada, por no resultar acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y los daños sufridos por el reclamante.

**Séptimo.-** El 7 de marzo de 2005 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.



En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

**3ª.-** Concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

**4ª.-** El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.



La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.



**5ª.-** El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación de daños y perjuicios formulada por D. xxxxxxxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos chopos de su propiedad.

El interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esto es, antes de transcurrir el plazo de un año.

**6ª.-** En cuanto al fondo de la cuestión planteada, estima este Consejo Consultivo, de igual modo que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que no existe responsabilidad por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños causados.

Una vez realizadas estas consideraciones previas, en relación con la cuestión que nos ocupa, hemos de decir que, de acuerdo con el artículo 12.1, letra a), de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, "la responsabilidad de los daños producidos por la pieza de caza, excepto cuando el daño sea debido a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá:

»a) En los terrenos cinegéticos, a quien ostente la titularidad cinegética de dichos terrenos, independientemente de que las piezas de caza pertenezcan a una especie incluida o no en el correspondiente plan de aprovechamiento cinegético (...).

»A tales efectos, tendrá la consideración de Titular cinegético de las Zonas de Caza Controlada, la Junta o la sociedad de cazadores concesionaria, en su caso.

»b) En los terrenos vedados, a los propietarios de los mismos, cuando la condición de vedado se derive de un acto voluntario de éstos o a la Junta".

Asimismo, el artículo 18 del citado texto legal dispone que "el territorio de Castilla y León se clasificará, a los efectos de la caza, en terrenos cinegéticos y no cinegéticos", teniendo la consideración de cinegéticos las reservas



regionales de caza, los cotos de caza y las zonas de caza controlada, y de no cinegéticos los refugios de caza, las zonas de seguridad y los vedados.

En este caso está acreditado que los daños fueron producidos por ciervos, planteándose la cuestión sobre la clasificación cinegética de los terrenos donde se ubican las plantaciones dañadas.

Al respecto, a la luz de la normativa antes citada, así como del expediente tramitado, y especialmente el informe emitido por la Jefe de la Sección de Vida Silvestre, puede entenderse que en el presente caso los terrenos correspondientes a la parcela objeto de reclamación están clasificados a efectos cinegéticos como coto privado de caza.

Así, el artículo 21 de la Ley de Caza dispone que “se denomina Coto de Caza toda superficie continua de terreno susceptible de aprovechamiento cinegético que haya sido declarada o reconocida como tal, mediante resolución del órgano competente (...). Se considerarán incluidos en un coto de caza aquellos predios enclavados en el mismo cuyos propietarios o titulares de otros derechos reales o personales que conlleven el uso y disfrute del aprovechamiento cinegético no se manifiesten expresamente en contrario una vez que les haya sido notificada personalmente (...)”.

Por tanto, en atención a la normativa citada, este Consejo Consultivo considera que tales fincas deben considerarse incluidas en el citado coto de caza, por lo que, puesto en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1.a), la responsabilidad corresponde a los titulares del coto de caza.

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución desestimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxxxxxxx debido a los daños ocasionados por el ciervo en unos chopos de su propiedad.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.